



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés**

#### **23-201**

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.  
Demandante: **MARGARITA DE JESUS DUARTE BALTASAR.**  
Demandado: **COLPENSIONES E.I.C.E., y otros.**  
Radicado No.: 05001-31-05-018-2021-00094-01.  
Tema: ineficacia traslado  
Decisión: **CONFIRMA Y MODIFICA SENTENCIA.**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Colfondos S.A., Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E., contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

El Magistrado de conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 036** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

##### **1.1. LO PRETENDIDO**

Solicitó la demandante, se declare la **INEFICACIA** del traslado al RAIS administrado por Colfondos S.A. y posteriormente por Protección S.A., considerando válida, vigente y sin solución de continuidad la afiliación al RPM. Que se declare que la actora es beneficiaria del régimen de transición bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 o la Ley 71 de 1988. Que se condene Colfondos S.A. y Protección S.A. a trasladar a Colpensiones todos y cada uno de los aportes que la actora efectuó al RAIS. Que se condene a Colpensiones a reactivar la afiliación en el RPM. Finalmente solicitó se condene al pago de costas y agencias en derecho.

##### **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- ✓ Que nació el 15 de enero de 1954, por lo que a 1 de abril contaba con más de 35 años de edad.
- ✓ Que inicio su actividad laboral con el municipio de Medellín en mayo de 1976, y posteriormente se afilió al RPM desde el 5 de abril de 1993.
- ✓ Que se trasladó al RAIS administrado por Colfondos S.A. el 6 de junio de 1994.
- ✓ Que el asesor de Colfondos S.A., le indicó que era mejor estar en el fondo privado ya que sus cotizaciones estarían seguras, se pensionaría a cualquier edad y con una mesada pensional superior, lo anterior, en razón a que el ISS podría desaparecer.
- ✓ Que Colfondos S.A., no cumplió con su deber de información y buen consejo al momento del traslado, pues no le manifestó que si se trasladaba perdería los beneficios de pensionarse bajo el régimen de transición.
- ✓ Que efectuó movilidad a Protección S.A. el 9 de abril de 1999, bajo la ausencia del deber de información y buen consejo, pues no se realizó un estudio individual sobre los beneficios y perjuicios que ocasionaría el traslado.
- ✓ Que a la fecha de presentación de la demanda contaba con 66 años de edad y más de 1200 semanas cotizadas en toda su vida laboral, de las cuales, más de 500 fueron cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad.
- ✓ Que solicitó ante Colpensiones el traslado de régimen pensional, entidad que mediante comunicado del 11 de febrero de 2021, negó la pretensión argumentando que le faltan menos de 10 años para cumplir la edad pensional.

### **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.**

Colpensiones E.I.C.E., se opuso a las pretensiones de la demanda; frente a los hechos indicó que son ciertos los relativos a la fecha de nacimiento de la actora, y la solicitud de traslado incoada. Frente al traslado de régimen pensional, destacó que no le consta aclarando que son supuestos exógenos al conocimiento de la entidad.

Colfondos S.A., se opuso a las pretensiones que la involucran; y aceptó el hecho relativo al traslado de régimen pensional. Frente a las circunstancias del traslado, indicó que a la accionante suscribió el formulario de afiliación de manera libre, voluntaria y con consentimiento informado, lo anterior con base en la asesoría brindada, en la cual se le informó las características, ventajas y desventajas de ambos regímenes, como que el valor real de la pensión sería determinado una vez se cumplieran los requisitos para acceder a la misma.

Protección S.A., se opuso a las pretensiones incoadas; y aceptó los hechos relativos a la fecha de nacimiento de la actora, el traslado efectuado y la solicitud de información incoada. Frente al traslado de régimen, indicó que brindó a la demandante una asesoría, clara, completa, comprensible, veraz y

profesional, la cual se realizó de forma independiente, estudiando las particularidades del caso, realizando las respectivas proyecciones pensionales en ambos regímenes de manera verbal, con el fin de determinar el panorama pensional de la actora y orientar debidamente su decisión.

#### **1.4 DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA.**

Mediante sentencia proferida el 21 de junio de 2023, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín dispuso lo siguiente:

“PRIMERO. Se DECLARA LA INEFICACIA DE AFILIACIÓN DEL TRASLADO efectuado por la señora MARGARITA DE JESÚS DUARTE BALTAZAR, a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y por ende la movilidad entre administradoras, concretamente con la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., como se dijo en las motivaciones.

SEGUNDO. Se ORDENA a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA, efectuar el traslado inmediato de todos los valores que hubiere recibido con motivo de su afiliación, a COLPENSIONES, como cotizaciones, con sus rendimientos; los gastos de administración debidamente indexados, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, los dineros aportados por la afiliada al fondo de garantía de pensión mínima.

En igual sentido, deberá ordenarse a COLFONDOS S.A. a trasladar a COLPENSIONES las sumas adicionales de la aseguradora y gastos de administración, con base en los mismos argumentos reseñados en precedencia.

TERCERO. SE ORDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, reactivar la afiliación de la parte actora, recibir las sumas indicadas y continuar como su administradora de pensiones, según se dijo en la parte motiva.

CUARTO. SE DECLARA que la señora MARGARITA DE JESÚS DUARTE BALTAZAR es beneficiaria del Régimen de Transición, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en consonancia con lo previsto en el Decreto 758 de 1990, norma bajo la cual deberá COLPENSIONES estudiar la prestación por vejez, una vez se agote la reclamación por parte de la demandante en lo que refiere a dicha prestación, tal y como se indicó en la parte motiva de la presente providencia.

QUINTO. SE DECLARA IMPROBADA la excepción de prescripción y las demás quedaron implícitamente resueltas como meras oposiciones.

SEXTO: SE CONDENA EN COSTAS a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN SA y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y

CESANTÍAS por resultar vencidas en juicio de conformidad con el art. 365 del CGP. Las agencias en derecho a ser incluidas en la liquidación de costas quedarán fijadas en la suma de un salario mínimo a cargo de cada una de las entidades del RAIS (ACUERDO No. PSAA16-10554), en favor de la parte demandante. Sin costas para COLPENSIONES.

OCTAVO. Sea o no apelada la presente decisión, remítase el expediente ante la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Medellín, para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.”

Dentro del término concedido por la ley, Colfondos S.A., Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E. interpusieron recurso de apelación.

## **2. ARGUMENTOS.**

### **2.1. DE LA JUEZ PARA DECIDIR.**

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de las administradoras del RAIS, en quienes recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

En cuanto al reconocimiento pensional, destacó la a quo que la actora está amparada por varias normas pensionales al haber cotizado en entidades públicas y privadas, sin embargo, solo cumple con los requisitos establecidos por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, razón por la cual, ordenó su reconocimiento bajo ese parámetro normativo una vez realice la petición ante la Colpensiones.

### **2.2. RECURSOS DE APELACIÓN.**

#### **2.2.1 PRESENTADO POR COLFONDOS S.A.**

Interpuso recurso de apelación de forma total, resaltando que la línea jurisprudencia de la CSJ, no es aplicable en el asunto por cuanto el asesor de Colfondos no estuvo presente al momento de la afiliación, pues el traslado obedeció a la orden del empleador, mismo que no fue integrado al contradictorio. En este sentido, conforme a lo indicado por el Tribunal de Bogotá en sentencia para el proceso 2022-00265-01, las consecuencias de la ineficacia no son oponibles al fondo privado, pues itero que el asesor comercial no estuvo presente al momento del traslado. Destacó que no es posible para la AFP brindar algún tipo de información cuando no fue convocada al acto de afiliación.

De otro lado, indicó que no es procedente el retorno de los gastos de administración, pues se descuentan por mandato legal, y tienen una destinación específica, como por ejemplo garantizar la administración y comprar los seguros de invalidez y sobrevivencia, en virtud de los cuales la actora estuvo amparada para estas contingencias durante el tiempo de afiliación a Colfondos, es decir que la deducción de estos conceptos cumplieron su cometido, reflejándose esto además en los rendimientos generados de forma positiva. Conforme a lo anterior, ordenar el retorno de los gastos de administración generaría un enriquecimiento injustificado en favor de Colpensiones, máxime cuando los gastos de administración y los seguros previsionales no son factores de financiación de la pensión de vejez, bajo este concepto también podría aplicarse el fenómeno jurídico de la prescripción sobre los mismos.

Frente a la indexación, resaltó que no es procedente por cuanto con los rendimientos se compensaría la devaluación monetaria, aunado a que dicho concepto no fue solicitado en las pretensiones de la demanda, por lo que, al declarar su procedencia se estaría transgrediendo los principios de consonancia y congruencia.

### **2.2.2 PRESENTADO POR PROTECCIÓN S.A.**

Interpuso recurso de apelación parcial en contra del traslado de las sumas de reaseguro de Fogafin.

En primer lugar, destacó que dicha obligación surgió a partir del artículo 99 de la Ley 100 de 1993, y que en la actualidad está regulada por la Resolución 05 de 2009, misma que derogó todas las regulaciones anteriores, y que no incluyó a las administradoras de fondos de pensiones dentro de las entidades obligadas a suscribir esta garantía. Aunado a lo anterior, destacó que la Ley 1450 de 2011, en su artículo 163 dispuso la eliminación de la garantía de Fogafin a las administradoras del RAIS, y con ello, eliminó la obligación de las aseguradoras de inscribirse en Fogafin, ordenando además el traslado al Tesoro Nacional de las reservas que existieren hasta la eliminación de dicha garantía. Bajo este panorama, destacó que la a quo ordenó el traslado de un concepto que se encuentra derogado por la normatividad vigente.

### **2.2.3 PRESENTADO POR COLPENSIONES E.I.C.E.**

Interpuso recurso de apelación en contra de la condena que obliga a la entidad a estudiar la prestación por vejez conforme a lo previsto por el Decreto 758 de 1990 una vez la accionante realice la reclamación administrativa, lo anterior, considerando que la aplicación del régimen de transición tiene una limitación en el tiempo, esto es, hasta el año 2010, o 2014 de forma excepcional. Conforme a lo anterior, la demandante pudo haber conservado su régimen de transición hasta el 2010, pues cumplió

el requisito de edad en el 2009, sin embargo continuó construyendo su derecho pensional y su IBL hasta el año 2023, por lo que condenar a Colpensiones al estudio de una prestación en virtud del régimen de transición defraudaría al sistema pensional, pues actualmente la accionante se encuentra construyendo el IBL y aportando al sistema, por lo cual además se transgrediría la limitación temporal del Acto Legislativo 01 de 2005 para la aplicación del Decreto 758 de 1990, y por ende, el principio de sostenibilidad financiera.

### **2.3 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.**

Vencido el termino para ejecutar esta etapa procesal, se percata la Sala que ninguna de las partes apporto Alegaciones finales.

## **3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

De acuerdo con lo planteado en los recursos de alzada, se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia. En caso afirmativo se determinará qué haberes le corresponde retornar a PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A. De otro lado, se analizará si es procedente el reconocimiento de la pensión de vejez de la actora con sujeción a lo dispuesto por el Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta el límite temporal para ser beneficiaria del régimen de transición impuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005.

Así mismo, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de apelación, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

## **4 CONSIDERACIONES**

A juicio de esta Magistratura, y teniendo en cuenta lo planteado en el recurso de alzada, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los

formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna*. (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia Corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

<b>Etapas acumulativas</b>	<b>Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información</b>	<b>Contenido mínimo y alcance del deber de información</b>
Deber de información  <b>ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA LA DEMANDANTE</b>	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.°, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.° del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.° 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta a la actora afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:



De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por la demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente el 06 de julio de 1994, fecha en la cual suscribió el formulario de afiliación a Colfondos S.A (fl 22 del archivo 11 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía la actora respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por la ausencia de una asesoría integral en donde se indique las características del RAIS, las consecuencias, ventajas y desventajas que acarrearía el traslado de régimen pensional.

Y es que expresamente la señora MARGARITA DE JESUS DUARTE BALTASAR, en el aludido interrogatorio expuso que su nivel de estudios era profesional en derecho, con especialidad en Derecho de Familia, y que labora como Notaria en el municipio de Planeta Rica. Respecto al traslado a Colfondos S.A., adujo que, se encontraba trabajando como docente en la Universidad de Antioquia, institución que al momento de vinculación le entregó el contrato de trabajo junto con el formulario de afiliación al RAIS aclarando que dicho acto se dio sin la presencia de un asesor comercial. Resaltó que posteriormente no se ocupó de verificar en que entidad estaba afiliada, pues simplemente firmaba los documentos de vinculación que le eran entregados, además de que había escuchado que era mejor estar en un fondo privado porque el ISS se iba a terminar, aclaró que desde el inicio de su vida laboral estuvo afiliada con el municipio y posteriormente con el ISS.

Respecto a la movilidad efectuada a Protección S.A., indicó que al igual que en la vinculación inicial al RAIS, al realizar la gestión de contratación en otra universidad, le entregaron el contrato de trabajo junto con el formulario de afiliación, sin que mediara una asesoría al momento de efectuar el traslado.

En cuanto a la reasesoría pensional, indicó que se hizo mediante una reunión general en la universidad, momento en el cual se ausento con anterioridad a la terminación por ocupaciones académicas, y firmó el documento sin ver su contenido.

Destacó que la motivación para retornar al RPM, es la diferencia en la cuantía de la mesada pensional.

Destáquese que la deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En todo caso, en gracia de discusión, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la

versión dada por la accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

Ha de agregarse que ninguna variación genera la **MOVILIDAD** entre diferentes administradoras del RAIS que se presentó en el caso de la señora DUARTE BALTASAR, quien en 1994 se vinculó a Colfondos, y posteriormente efectuó movilidad a Protección S.A. conforme se aprecia en el reporte del SIAFP (fl. 80 del archivo 10 del expediente digital), siendo Protección S.A. el fondo donde actualmente permanece desde el último cambio efectuado en el año 1999. Lo anterior por cuanto, de un lado, importa examinar lo acontecido al momento de cambiar de régimen, y de otro lado, cuando hay movilidad entre fondos privados, la asesoría NO suele referirse a las características del sistema de prima media, mucho menos a las implicaciones del cambio de sistema pensional, dado que son otras circunstancias las que se resaltan; no es lo mismo promover el cambio de una administradora a otra, a promover un cambio de régimen pensional, pues en el primer caso, por regla general, sólo se publicita la rentabilidad de uno u otro fondo, situación que ni siquiera acaeció en el caso de la actora, pues manifestó que en ningún momento le fue suministrada asesoría pensional por los asesores de las AFP accionadas.

Igual situación se predica la RE-ASESORÍA de la que fue objeto la demandante el 13 de noviembre de 2003 (fl.83 del archivo 10 del expediente digital), pues la información suministrada por el fondo en tal momento, cuando tenía 49 años de edad, en parte alguna puede asimilarse al cumplimiento del deber de información cuando se surtió el traslado, ni mucho menos es dable señalar que la persona contaba con la suficiente ilustración para tomar una decisión sobre su futuro pensional, pues cuando se realizó dicha diligencia, la actora ya había excedido el límite temporal para efectuar el traslado de régimen pensional.

Incluso, en gracia de discusión, aunque PROTECCION hubiese desmotivado oportunamente a la accionante al avizorar la posible inconveniencia de permanecer en dicho fondo, a igual conclusión llegaría la Sala pues ya la Corte Suprema de Justicia ha establecido que ello NO tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por las razones referenciadas en la sentencia de radicación 68.838 de 2019, entre ellas:

“(…) porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su

máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información”.

En todo caso, si la AFP incumplió su deber de información y por consiguiente debe declararse la ineficacia de la afiliación de la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa determinación implica privar de todo efecto práctico al traslado, por lo que mal haría esta Magistratura en siquiera pensar o asimilar una re-asesoría o una movilidad, a una convalidación, por definirlo de alguna manera, de un acto jurídico que nunca existió.

Fue precisamente este el raciocinio de la Sala de Casación Laboral en sentencia de radicación SL4705-2021, cuando recalcó que:

En consonancia con lo antes señalado, debe resaltar la Corte que, desde la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, se ha sostenido que, una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, **el acto jurídico no se torna en eficaz por los cambios que los afiliados hagan entre administradoras privadas** lo que ha sido reiterado entre otras en las providencias CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021

El anterior criterio es el que se encuentra vigente en la jurisprudencia de la Sala; motivo por el cual se recoge cualquier otro que le sea contrario y, frente a la cual se advierte que, como la declaratoria de ineficacia del traslado tiene como sustento el incumplimiento del deber de información en el traslado inicial, **al estar afectado el acto jurídico primigenio, los negocios jurídicos subyacentes adolecen de igual afectación**, entre ellos los traslados que se efectúen a los diversos fondos privados, ello en tanto que, el efecto de la declaratoria de ineficacia es volver al statu quo, lo que implica retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el cambio de sistema pensional no hubiera existido jamás (CSJ 4025-2021, CSJ SL4062-2021, CSJ SL 4064-2021, entre muchas otras).

Luego entonces, para la Sala es claro que, en el presente asunto ni de la afiliación inicial, como tampoco de los traslados posteriores entre los diferentes fondos privados se evidencia que se hubiese recibido una información integral, completa y oportuna que brindara una ilustración respecto de las características, condiciones del mercado, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las contingencias financieras que tal decisión supondría en su derecho o como se dijo en la sentencia CSJ SL 6 oct.2021, rad.83576 « no prueba por sí mismo y mucho menos genera una especie de presunción relativa a que la voluntad reflexiva de la persona afiliada al materializar su acto de traslado de régimen pensional y de los posteriores tránsitos entre administradoras estaban nutridos con la debida ilustración en los términos explicados, ni así lo ha previsto el legislador».

Por lo tanto, la Sala insiste y reitera que **el solo hecho de que el afiliado se traslade en varias oportunidades dentro del RAIS, no puede convalidar, ni suplir el incumplimiento del deber de información por parte de la AFP al momento del traslado inicial** y los traslados posteriores, así como tampoco resulta ser evidencia de que el afiliado fue informado debidamente en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia y, menos aún puede considerarse que dicha circunstancia modera las consecuencias que ello supone en la eficacia del acto jurídico celebrado; todo esto bajo el contexto de que en el proceso quede por establecido que efectivamente el demandante no fue debidamente informado. (Resaltos de la Sala)

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, dígame aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a todas las administradoras del RAIS accionadas, trasladar a Colpensiones E.I.C.E todos los valores que hubieren recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989,

providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **MODIFICARÁ y REVOCARÁ PARCIALMENTE** la sentencia de primera instancia, pues la a quo, no incluyó en la orden de traslado la totalidad de conceptos indicados con antelación, aunado a que ordenó el traslado de la prima de reaseguro de Fogafín, concepto que como acertadamente lo indicó la apoderada judicial de Protección S.A. en su recurso de alzada, se encuentra derogado y no es una obligación vigente para las administradoras de fondos de pensiones del RAIS, lo anterior de conformidad con el artículo 163 de la Ley 1450 de 2011, el cual a su tenor expone:

*“ARTÍCULO 163. GARANTÍA DE FOGAFÍN Y FONDO DE GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA. Elimínese la garantía de FOGAFÍN a las Administradoras de Cesantías y a las de pensiones en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y la obligación a las Aseguradoras de inscribirse en el Fogafín. Las reservas existentes se trasladarán al Tesoro Nacional dada la condición de garante que tiene la Nación en ambos sistemas.”*

Así las cosas, aclara la Sala que las administradoras del RAIS no tienen como obligación la suscripción de dicha garantía, y los remanentes existentes hasta el momento en que entro vigencia la precitada Ley, esto es el 16 de junio de 2011, fueron trasladados al Tesoro Nacional por lo que las AFP accionadas no están en el deber legal de retornar los conceptos relacionados con esta garantía.

De otro lado, cuando se presenta MOVILIDAD, es decir, la persona se traslada entre distintas administradoras del RAIS, se considera necesario señalar que tal obligación respecto de los valores a retornar NO debe recaer exclusivamente en cabeza de la última entidad afiliadora en que estuvo, como en este caso lo es Protección S.A., ni mucho menos se circunscribe al tiempo en que la persona estuvo en ese último fondo, de ahí que el retorno de los gastos de administración se extienda respecto de la época en que permaneció en Protección S.A. y Colfondos S.A.

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

*“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a*

COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...)Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que, no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES E.I.C.E. reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que la demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que la afiliada hubiere permanecido bajo la

administración de COLPENSIONES E.I.C.E., máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

De otro lado, respecto a la indexación de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente **MODIFICAR** el fallo, toda vez que, tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones E.I.C.E debidamente indexado por parte de Protección S.A. y Colfondos S.A., respecto del tiempo de permanencia en cada una y teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula:  $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$ . Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltense las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021<sup>1</sup>, al momento de

---

<sup>1</sup> Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

cumplirse la orden impartida, Protección S.A. y Colfondos S.A. deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones E.I.C.E., detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, punto en el que se **ADICIONARÁ** el fallo proferido por la a quo.

En cuanto a la inconformidad del recurrente atinente a la imposibilidad de retornar las cuotas de administración en tanto a su juicio había operado el fenómeno jurídico de la PRESCRIPCIÓN, habrá de señalarse que ya la Corte se ocupó del tema cuando mediante sentencia de radicación SL2946-2021 emitida el 16 de junio, la M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, reitero que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales así como los derechos que de ella emanen son imprescriptibles, es decir pueden reclamarse en cualquier tiempo. Aunado a ello, en este tipo de procesos no se trata solo de reversar el acto de traslado, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras y administradoras.

En sentencia SL1942-2021 adujo que:

*“Por último, cumple acotar que no prospera la excepción de prescripción propuesta por las demandadas, como acertadamente lo dispuso el a quo, porque los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden solicitar que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales en cualquier tiempo, para que, por esa vía se reconozca a cuál de tales regímenes (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados.*

*En definitiva, la mentada declaratoria de ineficacia es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social.”*

Y luego en la SL2208-2021 señaló:

*“En cuanto a la excepción de prescripción que propusieron las demandadas, debe precisarse que esta Sala ha sostenido reiteradamente que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, ha afirmado que, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento-surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en CSJ SL4360-2019).”*

En tal contexto, no sería dable acoger los razonamientos de Colfondos S.A. en este punto, máxime cuando no podría desligarse la ineficacia de sus efectos, aduciendo que los derechos derivados de ella no prescriben (retornar a prima media), pero sus consecuencias sí (montos a devolver).

## **RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.**

Bastará con decir que al no surtir efectos el traslado, se entiende que es dable acceder al análisis de los parámetros que determinan la prestación por vejez de la actora, punto central del recurso de alzada



presentado por Colpensiones, para lo cual es dable traer a colación el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual a su tenor expone:

“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014\*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley...”

De este modo, con el fin de precisar el cálculo temporal necesario para acceder al beneficio antes aludido, es pertinente traer a colación el artículo 151 ibídem, el cual determina desde que data entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, según la calidad de vinculación de los trabajadores, así:

“ARTÍCULO 151. VIGENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de abril de 1.994. No obstante, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente Ley, a partir de la vigencia de la misma.

PARÁGRAFO. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.”

En este orden de ideas, con base en la Historia Laboral de Colpensiones (carpeta CC-32508925 archivo denominado GRP-SCH-HL-66554443332211\_1971-20210427102428 del expediente digital), antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la demandante presentó su última afiliación reportando como empleador la cooperativa COOFOMENTO, por lo que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se debe contabilizar a 1 de abril de 1994, y dado que la señora MARGARITA DE JESUS DUARTE BALTASAR nació el 14 de enero de 1954, conforme se aprecia en la cédula de ciudadanía aportada (fl. 17 archivo 02, del expediente digital), a la data respectiva contaba con más de 35 años de edad, cumpliendo así el primer requisito para ser beneficiaria del régimen de transición.

Cabe destacar que, aunque NO obra en el plenario el Registro Civil de Nacimiento, los datos plasmados en la cédula de ciudadanía de la demandante son coincidentes con el que aprecia en la restante documentación, incluso incorporada por Protección S.A, entre ellas, la Historia Laboral (fl 39, archivo 10 del expediente digital), aunado a que Colpensiones E.I.C.E, mediante Concepto 4273229 de 2013<sup>2</sup> reconoció que la cédula era un documento idóneo para acreditar la edad al momento de reclamar este tipo de prestaciones económicas.

---

<sup>2</sup> 4. Conclusiones

Así las cosas, conforme a lo dispuesto en el parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005, el régimen de transición se limitó en sus efectos, hasta el 31 de julio de 2010, excepto para los trabajadores que acrediten 750 semanas de cotización, o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del mismo, esto es el 25 de julio de 2005, para quienes no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre del año 2014, en ese orden de ideas, se tiene que la demandante cumplió 55 años de edad el 15 de enero de 2009, y acredita un total de 506 semanas de cotización al 25 de julio de 2005, y 714,57 semanas al 31 de julio de 2010, momento para el cual acreditó 500 semanas de cotización anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad, esto es, a 14 de enero de 2009. Concluyendo así que la actora cumple con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de la misma anualidad.

Ahora bien, respecto al punto de disenso expuesto por Colpensiones, en el cual resaltó que no es posible tener en cuenta las cotizaciones posteriores al 31 de julio de 2010 para la construcción del IBL pensional, conforme a la limitante temporal traída por el Acto Legislativo 01 de 2005. En primer término, es dable traer a colación el parágrafo transitorio 4 de la precitada norma, el cual arguye:

*"Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014".*

*"Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen".*

En este orden de ideas, avizora esta Magistratura que la norma que precede no limita la aplicación del régimen de transición en data posterior al 31 de julio de 2010 o al 31 de diciembre de 2014, pues la restricción temporal que predica la normatividad se cimienta en los verbos rectores “mantener” y “extender” el régimen de transición, bajo el entendido de acreditar la causación de los derechos dentro

---

i) El registro civil fue estatuido por la Ley 92 de 1938 como único documento válido para acreditar el estado civil a partir de 15 de junio de 1938 y con anterioridad a ésta fecha, con la respectiva partida de bautismo.  
ii) La cédula de ciudadanía es el único documento válido, confiable e idóneo de identificación de las personas mayores de edad, de conformidad con lo regulado por la Ley 39 de 1961 y el Decreto 2241 de 1986 o Código Electoral.  
iii) En materia pensional, salvo lo estipulado en la Ley 962 de 2005 (de forma potestativa) y el Decreto 1889 de 1994 (para las pensiones de sobrevivientes únicamente), no existe ninguna otra normatividad que faculte a las entidades públicas o privadas para exigir el registro civil de nacimiento para adelantar el trámite de solicitudes pensionales.  
iv) Como quiera que con el registro civil de nacimiento se verifica, entre otros, la fecha de nacimiento y dicha data viene incluida en la cédula de ciudadanía, con el fin de reconocer las prestaciones económicas en las que se exija acreditar una edad determinada, éste documento será el idóneo para tal fin, pudiendo prescindirse válidamente del registro civil de nacimiento o de la partida de bautismo.  
v) Deberá seguirse exigiendo registro civil o partida para el reconocimiento de aquellas prestaciones en las que necesariamente deba demostrarse el parentesco, tales como (...)  
vi) La cédula de ciudadanía es un documento expedido por autoridad pública competente que se reputa auténtica conforme lo estipulado en el Artículo 25 del Decreto 019 de 2012.

de ese interregno, mas no para la ejecución de los mismos, esto es, la determinación de los parámetros de liquidación de la prestación por vejez, razón por la cual, resulta claro que la parte actora acreditó la causación de su derecho antes del límite temporal impuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005, pues para la data en que acreditó el cumplimiento de los 55 años de edad, esto es, el 14 de enero de 2009, contaba con 500 semanas de cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional, razón por la cual, tiene derecho a que el estudio de la mesada pensional que eventualmente le correspondiere, se haga teniendo en cuenta el beneficio de la transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, sin perjuicio de que acredite cotizaciones posteriores al 31 de julio de 2010.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA PARCIALMENTE** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema, **revocándola y modificándola** en los aspectos antes aludidos.

Costas en esta instancia, a cargo de Colfondos S.A. y Colpensiones E.I.C.E. Se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 para cada entidad y a favor de la demandante.

## **5 DECISIÓN DEL TRIBUNAL.**

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida el 21 de junio de 2023 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **MARGARITA DE JESUS DUARTE BALTASAR** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 32.508.925, en contra de **COLFONDOS S.A., PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E.**

**SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE** el numeral segundo de la providencia, bajo el entendido que las administradoras del RAIS accionadas no están en la obligación de trasladar los aportes correspondientes a la prima de reaseguro de Fogafín de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

**TERCERO: MODIFICAR** el numeral segundo de la providencia, bajo el entendido que las administradoras del RAIS accionadas trasladarán a COLPENSIONES E.I.C.E., todos los valores que hubieren recibido con motivo de la afiliación de la demandante, incluyendo también los tres ítems que componen los gastos de administración (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima)

debidamente **INDEXADOS**, oportunidad en la que **además deberán discriminar** los conceptos entregados a COLPENSIONES E.I.C.E., detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, junto con el detalle de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

**CUARTO:** Costas en esta instancia a cargo de Colfondos S.A. y Colpensiones E.I.C.E. Se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 para cada entidad y a favor de la demandante.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante:	<b>MARGARITA DE JESUS DUARTE BALTASAR.</b>
Demandado:	<b>COLPENSIONES E.I.C.E., y otros.</b>
Radicado No.:	05001-31-05- <b>018-2021-00094-01</b> .
Tema:	ineficacia traslado
Decisión:	<b>CONFIRMA Y MODIFICA SENTENCIA.</b>
Fecha de la sentencia:	<b>27/10/2023.</b>

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 30/10/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario